

98
El Gobierno de
Buenos Aires

Buenos Aires Febrero 6 de 1861

M. Excmo. Señor Ministro de Justicia, enca-
rgado del Ministerio del Interior.

El Gobierno de Buenos Aires a presencia de la
destrucción del ses legal de la Provincia
de San Juan y de los cónones y atentados
de todo género en ella cometidos, por la inter-
vención armada que la ha reducido a
ruinas y cautiverio, ensangrentándola,
no puede prescindir de reclamar en sus
derechos propios como Provincia fed-
rada, y a nombre de la Humanidad, de
la Constitución Nacional, del honor del
pueblo Argentino, y en el interés de su con-
servación, contra las violaciones del
pacto político y social que lega a de-
velar a las Provincias y que se halla pe-
fundamente afectado, por aquellos aconte-
cimientos.

Si el pueblo de Buenos Aires forma parte integrante de la Nación Argentina, es en virtud de un pacto fundamental que garante a todas las Provincias el libre uso de su Soberanía propia y no delegada expresamente, y que asegura a todos los ciudadanos las garantías sociales fuera de cuyas condiciones no puede haber asociación posible sino por la ley de la violencia; y el Gobierno trairía los intereses del pueblo que preside, si al no violadas esas garantías y desconocidos esos derechos, no reclamase, como lo hace, usando al efecto de una facultad que expresamente se ha reservado y que en todo caso la solemnidad de las circunstancias presentes autorizarían.

El Gobierno de Buenos Aires no desconoce los motivos de conveniencia pública que pudieran impulsar al Gobierno Nacional a decretar la intervención en los negocios de San Juan, cuando esa Provincia se presentaba como a merced de una turba de asesinos que no respetaba ni la vida de las mujeres y los niños;

pero esa intervención puramente protectora, como se declaraba en el decreto, no tenía ni podía tener otro objeto que el de garantizar por medio del poder general, la vida y la propiedad de los ciudadanos, presidiendo a la reconstrucción legal del ser político de San Juan; autorizando el uso de la fuerza en el último extremo, y al solo efecto de prestar esa protección, según entendiéndose, provenía en las instrucciones, haciéndose en todo caso efectivas las responsabilidades a que hubiere lugar, con arreglo a los preceptos de la Constitución Nacional.

Por una vez conocida la situación interna de la Provincia de San Juan, restablecido en ella el orden y constituido un Gobierno regular emanado de la soberanía originaria del pueblo, (que el mismo decreto del Ejecutivo Nacional reconocía expresamente, y que declaraba tenía por objeto proteger), la intervención del Gobierno General no podía tener por misión el auxiliar esa misma Soberanía, que es la fuente de donde derivan todos los poderes legítimos en un ~~un~~ pueblo republicano representativo. — El reconocimiento del Gobierno Nacional, en su carácter de tal

tiva y racional, lanzándose sin piedad
dentro de las vías de hecho, que no
podían traer sino nuevos males y com-
plicaciones; y esto sin que la situación
se hubiese modificado, o mas bien dicha
cuando se habia modificado favorable-
mente en el sentido de una resolución pa-
cífica y legal; y comprende menos esto,
cuando el Gobierno de Buenos Aires tiene
motivos fundados para creer que las ins-
trucciones del Sr. R. C. eran contrarias a
sus propositos, tan violento como injusti-
ficado. —

El Gobierno de Buenos Aires se permite re-
cordar al Sr. R. C. estos antecedentes que son
del dominio público y constan de docu-
mentos oficiales, no precisamente para
traerlos a juicio, sino para manifestar
en guarda de su derecho, que la Provin-
cia de Buenos Aires, a la par de todas las
que componen la Nacion, está interesada
en conocer las razones que decidieron la
intervencion armada contra San Juan
para someterle a sangre y fuego; y

el Gobierno Nacional que envió al Comisionado, no puede preceder como Gobierno popular sometido a la regla Constitucional, de dar al País, una explicacion sobre el particular; así como de las circunstancias que hazen podido hacer inevitable un combate, en que se ha usado de una ferocidad sin ejemplo en nuestro País, aun en las épocas mas sangrientas de nuestras desgraciadas luchas; por que de esas explicaciones unicamente puede venir a las Provincias el conocimiento de como el Gobierno Nacional entiende y aplica la Constitucion en lo que hace a sus relaciones de hecho y de derecho con el Poder Federal.

Esta explicacion debida a los Pueblos en el orden político y a los hombres constituidos en sociedad, en presencia de un acontecimiento tan gran como doloroso, no podia ser negada por el Gobierno Nacional, aun cuando ella no fuese pedida en el uso de un derecho perfecto, cual es el de conocer de antemano las reglas y procedimientos que se han de hacer extensivos a las demas Provincias en casos análogos.

para hacer valer a su debido tiempo, y
como correspondan las acciones a que haya
lugar.

Pero la seguridad y quietud de la Provincia de
Buenos Aires, así como la de las demás Pro-
vincias hermanas, que es el resultado de
tantos sacrificios, merece algo mas que
una explicacion, y el Gobierno de ella no
cumplia con su deber sino hiciere presen-
te al de la Nacion con todo respeto, que los
crímenes y atentados, que son de notori-
dad pública, cometidos en San Juan, por
los fueros a las ordenes del Comisionado
Nacional despues del Combate, exige
que la moral pública y la justicia sean
igualmente satisfechas con el castigo de
los criminales, con sujecion estricta a la
ley, y la seguridad de las Provincias lo
exige del mismo modo, y cada una de
ellas, como parte fuere y debe reclamar
que ese castigo se haga efectivo.

El Gobierno de Buenos Aires, fundandose en
certidumbres morales a que debia prestar
entero crédito, ha asegurado al Pueblo

en honor del Gobierno Nacional que
este condenaria energicamente a los hom-
bres que han hecho estrepitosos de i. p. ante
a la República y que ~~serán~~ encerrados
por toda los pueblos ^{nulos} de la Unión; y nada
podido dudar que los criminales serian
legalmente castigados, segun lo promete
en un documento publico que se ha cumplido
placido en Buenos Aires, requirién-
dolo como parte interesada, si fuese nece-
sario; porque solo así pueden llenarse los
altos fines de la Constitución contenidos
en su preámbulo, bajo la ~~adhesión~~ ^{adhesión} de Dios,
y con el ~~afianzamiento~~ ^{afianzamiento} de la justicia, la
consolidación de la paz interior, el bien
estar general y los beneficios de la libe-
dad para nosotros y nuestra posteridad."

Pero por las notas oficiales del
Gobierno Nacional a su Comisionado, con
motivo de los puntos que se ha parado y
que han llegado al conocimiento de este
Gobierno, por publicaciones autorizadas,
se ve que a la vez que se pide datos
para apreciar y juzgar su inculcable
conducta y de si ha sido o no indispen-

3
 sable el uso extremo de la fuerza e inevitable la sangrienta carnicería del campo de batalla; por otra nota le dirige una aprobación y atenuación de los procedimientos que ha declarado no poder apreciar; y esto al mismo tiempo que le manda proceder contra los asesinos del Gobernador D. J. N. Antonio Aberastain y contra los criminales que han dishonrado con sus excesos las armas nacionales después del combate.

Estas incertidumbres que agreden la alarma del pueblo en punto que tan vitalmente le interesa por cuanto afecta su tranquilidad presente y su seguridad futura, toman un carácter mas serio con presencia de los demás documentos del Gobierno Nacional y la parte que se refieren a la condición en que queda la Provincia de San Juan. — Por ello se declara, y el mismo Gobierno Nacional lo dice, que motivada la intervención armada contra San Juan, si no solo no tiene datos para juzgar si el uso extremo de la fuerza ha sido justificado, y si el

sacrificio de cuatrocientas víctimas
ha sido inevitables, sino que además,
después de tanto gasto, de tanta ruina
y sangre derramada, esa intervención
no ^{ha} tenido los objetos, ni ha producido
los únicos efectos que podría tener en
mira ese Gobierno con arreglo a la Cons-
titucion, puesto que se declara que no
hay justicia posible en presencia de
cuatrocientos cadáveres, y se man-
dan poner en libertad a los prisioneros
calificados de asesinos por el Comisiona-
do; y no se refonen porque no pueden re-
ponerse las autoridades Constituidas
anteriores a la revolucion, mandando-
se en consecuencia crear una autoridad
provisoria, autorizando a la vez la per-
manencia de fuerzas interventoras en la
Provincia vencida, a la que ni siquiera
han podido ser garantidas sus vidas
y propiedades. —

Ni a Buenos Aires ni
a ninguna de las Provincias que for-
man la Nacion Argentina, y cuyos de-

rechas, prerrogativas y soberanía propia, están garantidas por el pacto político y social, puede ser indiferente la desgraciada suerte de una Provincia federata reducida a la condición de un pueblo conquistado, después de haber sido cruelmente martirizado, que en cierto modo desaparece del Mapa Constitucional, sin medio para restablecer su ser legal, toda a consecuencia de una intervención armada que al mismo Gobierno Nacional no tiene datos para aprobar, como justificada, no obstante dar su aprobación al hecho de armas que ha producido ese doloroso resultado. —

El Gobierno de Buenos Aires no duda que el de la Nación en desagravio de la justicia, en reivindicación de la moral, en el interés de la estabilidad del umbral y de calmar la furta alarma del pueblo en presencia de tan desmoralizado espectáculo, hará cumplir la ley fundamental, que

esta regla de pueblos y Gobiernos, y que al dignarse declarar que con arreglo a la Constitución, las intervenciones navales, no pueden en ningún caso tener por objeto, el arrebatar a las Provincias su ser legal, como ha sucedido en San Juan, porque esto importaría la facultad de destruir todo el orden federativo, y afectaría directamente, como afecta ya en hecho, la soberanía de cada Provincia y las garantías de los ciudadanos, alterando la confianza en el porvenir de la unión; hará al mismo tiempo efectivo el castigo de los criminales, según lo ha prometido ya, y como no puede dejar de suceder en un pueblo en que la Ley debe ser superior a todo y a todos, dictando al efecto, medidas eficaces. —

El Gobierno de Buenos Aires se persuade que no han llegado al conocimiento del Sr. B. todos los hechos que han tenido lugar en San Juan, o que por lo menos, no le ha prestado entera credita, y que a esto debe abo-

2/
 huir la eficacia de las medidas
 dictadas hasta el presente, para inspi-
 rar confianza a las Provincias y tra-
 er a los espíritus la calma alterada
 por los inauditos sucesos de que ha
 sido teatro una provincia hermana
 garantida por la Constitución que ha
 jurado los pueblos, y cruza desgraciada-
 raiciones, no pueden quedar sin repa-
 ración en un país cristiano, civilizado,
 y que se rige por instituciones libres.

Pero si desgraciadamente fuese el pensamiento
 del Gobierno Nacional, aprobar en todas
 sus partes la conducta de su Comisiona-
 do, como podría deducirse del espíri-
 tu de la nota de 1.º del Comodoro, del
 Ministerio de la Guerra, el Gobierno
 de Buenos Aires debería en el penoso pe-
 so imprescindible deber de protestar con-
 tra un acto que afectaría profunda-
 mente el pacto político y social y
 los derechos primordiales de los pueblos,
 y usaría en tal caso de las medidas
 legítimas que la Constitución es-

tablice para salvar los vitales derechos, porque esos derechos son la propiedad de los pueblos, que no han enagenado, no pueden enagenar y que nadie puede arrebatárselos sino por la violencia. —

El Gobierno de Buenos Aires fiel intérprete de la opinión del pueblo y contando con el apoyo de todos los Poderes Públicos, al reclamar como lo hace, en nombre de su derecho el cumplimiento del Pacto Federativo, en cuya conservación está directamente interesado; y al exacerbar las Crismones y atentados de todo género cometidos por la intervención armada en San Juan, usando al hacerlo de un derecho inherente a todo ser humano, espera que R. C. tendrá a bien poner esta nota en conocimiento de S. E. el Señor Presidente de la República y comunicarla tan pronto como le sea posible lo que halla por conveniente

resolver en tan grave asunto.

Dios que a V. E. me lo ordene.